

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE LAS AMÉRICAS DE HUMAN RIGHTS WATCH:

Frente al crimen organizado, en la región "hace falta capacidad de administración de justicia local"

EVA LUNA GATICA

La compleja situación humanitaria y de violencia en Haití y la crisis poselectoral en Venezuela han empujado a muchas personas a migrar, agudizando una problemática de años en la región y que para Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), requiere de medidas de protección para evitar que quienes se encuentran en esas circunstancias caigan en manos del crimen organizado.

Goebertus, exmiembro de la Cámara de Representantes de Colombia, comenta la situación de los DD.HH. en la región en esta entrevista con "El Mercurio", durante su visita a Santiago en el marco de los 40 años de la Declaración de Cartagena, un instrumento de cooperación regional para fortalecer la protección de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, y cuyo "Plan de acción" será liderado por Chile durante los próximos diez años.

—¿Cómo evalúan la actual situación de los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro?

"El régimen de Nicolás Maduro ha violado los derechos humanos de manera sistemática en contra de su población. La misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas ha llegado a la conclusión de que bajo su gobierno se han cometido crímenes de lesa humanidad como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. La Corte Penal Internacional (CPI) investiga a varios del círculo más cercano de Maduro por la comisión de crímenes de lesa humanidad, (...) y nosotros hemos documentado más de 2.000 casos de personas que permanecen detenidas luego del 28 de julio, perseguidas por terrorismo solo por el hecho de salir a protestar, por defender su derecho al voto, y que los votos fueran contados de manera transparente y los resultados respetados. También he-

Juanita Goebertus señala que, ante las crisis en Haití y Venezuela, se requieren medidas de protección para quienes huyen de esos países, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en América Latina.



FELIPE BAEZ

mos documentado, de manera muy grave, 23 casos de personas que fueron asesinadas luego del 28 de julio, de los que fueron responsables las Fuerzas Armadas venezolanas o grupos de civiles que colaboran directamente con las fuerzas de seguridad. Es realmente una crisis dramática que

explica que millones de venezolanos hayan salido para proteger sus vidas y las de sus familias, en búsqueda de protección internacional tanto en Chile como en otros países".

—¿Qué acciones podrían llevar a cabo los gobiernos latinoame-

ricanos frente a esta crisis?

"Justamente se cumplen este año 40 años de la Declaración en Cartagena, y Chile como líder del Plan de acción para los próximos 10 años, acaba de recibir a los distintos jefes de delegación de toda la región para renovar ese compromiso, que en los 80 estableció que debía concederse el asilo, no solamente a las personas que eran consideradas perseguidas por razones políticas, de raza o de religión, sino también a personas que huían de sus países en contextos de masivas violaciones a derechos humanos o violencia generalizada. Es evidente que lo que viene sucediendo en Haití y Ecuador cumple a todas luces las circunstancias que los propios Estados describieron en la declaración, por lo que deberían dar refugio a las personas que vienen huyendo de estos contextos".

—Haití enfrenta altos índices de violencia ligada a las pandillas. ¿Cómo los países podrían hacer frente a esta crisis?

"En Haití hay un colapso absoluto de todas las instituciones del Estado, hay más de 300 bandas que controlan el territorio haitiano. (...) Lo que sucede en Haití es una población que ha sido dejada a la total desprotección a manos de estas pandillas. (...) Y en ese marco, todos los países de la región tendrían que tomar medidas para proteger hoy a los haitianos. La situación de Chile es especialmente delicada. Chile a pesar de que ha recibido 200 solicitudes de asilo de haitianos tan solo ha concedido a la fecha 2, es una tasa del 1% incluso inferior a su tasa general ya muy baja de otorgamiento de asilos que se ubica en el 3%".

—Con estas dos problemáticas en mente y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿ven con preocupación la seguridad de los migrantes en la región?

"Absolutamente. Nosotros hemos venido haciendo trabajo de campo, particularmente los últimos dos años, en el Darién,

esta selva en la frontera entre Colombia y Panamá, y lo que hemos podido documentar es que lejos de reducir los niveles de migrantes que llegan a la frontera sur con Estados Unidos, la introducción de políticas que buscan bloquear el paso de migrantes y la imposición de visados, lo que hacen es empujar a los migrantes a rutas más peligrosas controladas por el crimen organizado. (...) Lo que nos responde el gobierno colombiano de manera oficial es que bajo los cálculos de la inteligencia colombiana, de cada migrante que sale por Colombia hacia el Darién, 125 dólares terminan en manos del Clan del Golfo, un poderoso grupo de crimen organizado que opera en territorio colombiano, responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Esto equivale a 68 millones de dólares al año. Cuál es la conclusión que podemos sacar, que expulsar y bloquear migrantes lejos de debilitar el crimen organizado, lo fortalece. (...)

“Expulsar y bloquear migrantes lejos de debilitar el crimen organizado, lo fortalece”.

Es muy lamentable ver que, si bien de forma diplomática, los países reunidos acá en Chile renovaron su compromiso con la declaración de Cartagena, ese compromiso de política exterior no se ve reflejado, en la mayoría de los casos, en sus políticas domésticas. El caso de Chile es emblemático, Chile ha tenido una política exterior defensora de derechos humanos contundente, al condenar las gravísimas violaciones a los derechos humanos en Venezuela y El Salvador. Sin embargo, domésticamente ha introducido restricciones al derecho de asilo".

—¿Cómo podrían los países de la región hacer frente a la crisis de seguridad ligada al crimen organizado?

"Lo primero son políticas domésticas. América Latina tiene la tasa de homicidios más alta en

comparación con otras regiones del mundo y lo que es más grave, tiene la tasa de impunidad por homicidios más alta. Eso significa que lo principal que nos hace falta es capacidad de administración de justicia local, es decir, tener la capacidad para investigar quiénes están detrás de estas redes, y colaborar con las naciones latinoamericanas para el desmantelamiento de este tipo de fenómenos. Lo grave que nos está sucediendo como región es que en vez de dedicar los esfuerzos a eso, a desarticular estas

redes de crimen organizado, hay esfuerzos de encarcelamiento masivo o de culpabilización populista de los migrantes por la crisis de seguridad".

—HRW declaró que un segundo mandato de Trump representa una amenaza para los derechos. ¿Qué les preocupa?

"Tenemos los antecedentes de lo que fue su primer período y las declaraciones que hizo tanto durante la campaña como luego de ser elegido. En primer lugar, nos preocupan mucho los anuncios de deportaciones masivas. Está comprobado, así lo muestra la evidencia, que los procesos de deportaciones masivas no reducen el número de migrantes buscando llegar a Estados Unidos (...) y además, fortalecen al crimen organizado.

Nos preocupan mucho también los anuncios de la posible introducción de nuevos aranceles que restringirían gravemente el comercio internacional, y que muy seguramente tendrán un impacto fuerte a nivel económico en América Latina, ampliando no solo la pobreza, sino la desigualdad en varios de nuestros países y lo que es también muy grave, es que se podría hacer uso de las tarifas de una manera extorsiva, para tratar de hacer que los países tomen decisiones contrarias a sus políticas para evitar la introducción de aranceles".